

SESIONES ORDINARIAS

2006

ORDEN DEL DIA N° 395

COMISIONES DE COMERCIO Y DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Impreso el día 14 de junio de 2006

Término del artículo 113: 26 de junio de 2006

SUMARIO: **Ley 25.156**, de defensa de la competencia, sobre actos o conductas prohibidos. Modificación. **Vaca Narvaja y otros**. (431-D.-2006.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor han considerado el proyecto de ley de la señora diputada Vaca Narvaja y otros señores diputados por el que se modifica el artículo 1° de la ley 25.156, de defensa de la competencia, sobre actos o conductas prohibidos; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

DEFENSA DE LA COMPETENCIA. INTERESES ECONOMICOS DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley 25.156, de defensa de la competencia, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1° – Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico de los consumidores o del interés económico general.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 1° de junio de 2006.

Hugo D. Toledo. – José R. Mongeló. – Guillermo F. Baigorri. – Julio E. Arriaga. – Patricia E. Panzoni. – Esteban J. Bullrich. – Amanda S. Genem. – Eduardo G. Macaluse. – Raúl G. Merino. – Laura J. Sesma. – Eduardo L. Accastello. – Mario F. Bejarano. – Ana Berraute. – Daniel A. Brue. – Genaro A. Collantes. – Stella M. Córdoba. – Héctor R. Daza. – María G. De la Rosa. – Susana E. Díaz. – Gustavo E. Ferri. – Luis A. Galvalisi. – María T. García. – Miguel A. Giubergia. – Ricardo J. Jano. – Beatriz M. Leyba de Martí. – Marta O. Maffei. – Araceli E. Méndez de Ferreyra. – Osvaldo M. Nemirovski. – Blanca I. Osuna. – María del Carmen C. Rico. – Raúl P. Solanas. – José R. Uñac. – Patricia Vaca Narvaja.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor, al considerar el proyecto de ley de la señora diputada Vaca Narvaja y otros señores diputados, cree innecesario abundar en más detalles que los señalados en los fundamentos

que lo acompañan, por lo cual los hacen suyos y así lo expresan.

Hugo D. Toledo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Los argentinos hemos aprendido, con creces, que la política económica de un país debe servir al desarrollo y bienestar de su pueblo y no al revés.

En tal sentido, la normativa vigente en materia de defensa de la competencia, constituye una herramienta imprescindible para la protección de los derechos e intereses de los consumidores, ya que prohíbe los actos y conductas que limiten, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante.

Ahora bien, la ley 25.156, de defensa de la competencia, actualmente vigente define en el artículo 1°, que una conducta prohibida es pasible de sanción cuando resulte “perjuicio para el interés económico general”.

No cabe duda esta definición pretendió dejar de lado aquellas conductas que no sean necesariamente perjudiciales para los consumidores ni para los competidores.

Sin embargo, la ley no definió que debe ser considerado como “interés económico general”, dejándolo al criterio subjetivo de la autoridad de aplicación.

En distintos dictámenes, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia consideró que un acto lesivo a la competencia y al correcto funcionamiento del mercado resulta per se lesivo al interés económico general. Pero, sin embargo, hay que destacar que no siempre se entendió que existiera esa identidad absoluta entre “interés económico general” y ejercicio de la libre competencia.

El examen de la legislación comparada es contrario a dicho criterio. La legislación española (1989) eliminó el concepto, que sí estaba en leyes anteriores y la modificación de la ley inglesa (1976) adoptó similar criterio. Ni la legislación norteamericana ni la legislación alemana incluyen el concepto. Tampoco lo ha incluido la última ley del Brasil (ley 8.884 del 11-06-94), ni existe mención en el protocolo de defensa de la competencia del Mercosur (licenciado Américo García, “Realidad Económica”, N° 170, Buenos Aires, marzo de 2000).

Hay numerosos trabajos y estudios que han analizado críticamente la inclusión del concepto del “interés económico general”. En tal sentido señala un trabajo jurídico sobre la cuestión: “Analizados todos estos elementos creemos que resulta menester, de lege ferenda, eliminar dentro de la figura tipificante del ilícito toda referencia a un concepto

tan vago, amplio y variable como el ‘interés económico general’...”.

“Como corolario [...] debemos concluir que [...] se debe optar por la no inclusión del concepto del ‘interés económico general’ en un próximo proyecto de reforma”.

“Basamos esta tesis en que la figura del interés económico general al ser un criterio eminentemente subjetivo, mutante y condicionado a la decisión política, le quita precisión a la norma legal”. (Solano, A., y Lanosa, W.: *El interés económico general en la Ley de Defensa de la Competencia*, en “La Ley”, año LVII-248, 30-12-93).

Desde un punto de vista estrictamente económico, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ha tratado de precisar la cuestión a través de la definición de “bienestar social”, tomando en cuenta para ello los conceptos de “excedente del consumidor” y “excedente del productor”.

La idea es que dicho excedente se va maximizando a medida que el mercado opera con mayores grados de competencia y viceversa y su ventaja radica en que puede definirse en términos monetarios.

De todos modos, la misma comisión ha expresado que el uso del “excedente total”, o sea la suma de los excedentes que obtienen consumidores y productores se basa “en una serie de supuestos que en algunos casos pueden resultar inexactos” (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia: “Breve análisis económico de la ley argentina de defensa de la competencia”. Serie documentos. Año 1 Número 1).

Es decir, el término “interés general” no resulta suficientemente claro, siendo necesario, en consecuencia, indicar con claridad, en el texto normativo, cual es el interés que la ley protege.

Por tales motivos, resulta de utilidad, modificar el artículo 1° de la ley 25.156 de Defensa de la Competencia, a fin de establecer que están prohibidos y serán sancionados, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico de empresas competidoras o de los consumidores.

Así, la autoridad de aplicación contará, al definir con claridad cuales son los intereses protegidos por la norma, con un elemento más útil al momento de evaluar los actos y las conductas investigadas.

Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto del ley.

Patricia Vaca Narvaja. – Stella M. Córdoba. – Alberto C. Gutiérrez. – Mercedes Marcó de Pont.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley 25.156, de defensa de la competencia, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1° — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el

acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico de empresas competidoras o de los consumidores.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Patricia Vaca Narvaja. – Stella M. Córdoba. – Alberto C. Gutiérrez. – Mercedes Marcó de Pont.